AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES propuesto por MARCO ANTONIO MATOS FRANCO contra la Junta de Conciliación y Decisión N°4.- (MAGISTRADO PONENTE: AMERICO RIVERA L.).-

+
NO SE ADMITE el Amparo.-
+

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. PANAMA, seis de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.-

VISTOS:

MARCO ANTONIO MATOS FRANCO, mediante apoderado especial, ha demandado Amparo Constitucional para que la Corte, previo el cumplimiento del trámite correspondiente "...revoque la orden DE SECUESTRO (NO HACER), impartida por la JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NUMERO CUATRO (4), presidida por la LIC. BERTA ALICIA AGUIRRE G., contenida en la resolución de veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos ochenta y dos (1982), en donde dicha Funcionaria, "administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA formal secuestro sobre la administración, los bienes muebles e inmuebles de la empresa RESCAPE EL EXAGERADO y/o MARCO ANTONIO MATOS, ubicado en Avenida México y Avenida Justo Arosemena, hasta la concurrencia de B/.5,000.00 (cinco mil balboas)...".

De acuerdo con jurisprudencia constante y uniforme del Pleno de la Corte el procedimiento que se origina con el ejercicio de la acción de Amparo Constitucional no es vía procesal adecuada para revocar resoluciones de naturaleza jurisdiccional con el fin de enmendar agravios inferidos a las partes con la decisión atacada. Esa tesis reiterada de la Corte ha sido expuesta, entre otras, en la decisión de inadmisibilidad fechada el 12 de julio de 1982 y cuya parte pertinente dice:

"Se trata, entonces, del ejercicio de una acción de Amparo con pretensión de que se revoque una decisión de naturaleza jurisdiccional, adoptada por una Junta de Conciliación y Decisión, como Tribunal de Trabajo, porque en el procedimiento cumplido para lograrla, se incurrió en error al apreciar la prueba, circunstancia que, según el demandante, generó la violación constitucional que justifica el Amparo demandado. Ello, evidentemente, no es objeto material del proceso constitucional de Amparo. El Amparo Constitucional, ha dicho la Corte, reiteradamente, constituye una vía especial de impugnación -caracterizada por su trámite su-

mario y de urgencia- con la finalidad de evitar, sin demoras, un daño inminente, provocado por una orden abusiva, de funcionario público, generadora -por ello- de una situación de hecho, violatoria de una precisa garantía constitucional.

Por tal motivo, el Amparo Constitucional, no es vía procesalmente adecuada para anular, rescindir o levantar un secuestro practicado por un Tribunal que ejerce funciones jurisdiccionales. En otras palabras, la revocación de una decisión de naturaleza jurisdiccional, no es objeto material del procedimiento que se origina con el ejercicio de la Acción de Amparo". (V. R. J. Julio 1982. pág. 41-43).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia -PLENO- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Amparo Constitucional demandado, en este caso, por MARCO ANTONIO MATOS FRANCO, mediante apoderado especial.

COPIESE, NOTIFIQUESE, Y ARCHIVASE,

(FDO.) AMERICO RIVERA L., (FDO.) GONZALO RODRIGUEZ M., (FDO.) OLMEDO SANJUR G., (FDO.) RICARDO VALDES, (FDO.) LAO SANTIAGO PEREZ, (FDO.) MARISOL M. REYES de VASQUEZ, (FDO.) EDGARDO E. ARTAS, (FDO.) JULIO LOMBARDO A., (FDO.) PEDRO MORENO C., (FDO.) SANTANDER CASIS S., SECRETARIO GENERAL.-

++++
++++
++++

EL JUEZ 2º MUNICIPAL consulta la INCONSTITUCIONALIDAD del Artículo 46 de la Ley 93 de 1973 y el Decreto 37 de 1974.- (MAGISTRADA PONENTE: MARISOL M. REYES de VASQUEZ).-

+
SE DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 46 de la Ley 93 de 1973.-
+

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. PANAMA, seis de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.-

VISTOS:

El Juez Segundo Municipal (Ramo Civil) elevó consulta de inconstitucionalidad sobre la norma contenida en el artículo 46 de la Ley 93 de 1973, dentro de la demanda de desahucio promovida por Paredes y González Ruiz, Ingenieros, S.A., contra Arturo Moris Cea, consulta que realiza por advertencia que hiciera el Licenciado José A. Saavedra en los siguientes términos:

"Esta solicitud se funda en los siguientes HECHOS:

PRIMERO: De acuerdo con cláusula del contrato firmado por mi mandante con Paredes y González Ruiz Ingenieros, S.A. el 4 de marzo de 1978, el término de tres años se prorrogan por el igual período con la única condición de que el arrendatario se encuentre a paz y salvo con el canon de arrendamiento fijado en el mismo contrato.

SEGUNDO: En virtud de lo anterior no se produce el fenómeno de tácita reconducción y por lo tanto el contrato adquiere, mediante la prórroga expresa, un término fijo. No existe el carácter de indefinido por voluntad de las partes que suscribieron el dicho contrato.

TERCERO: Si no es indefinido no puede ser aplicable el artículo 46 de la Ley 93 de 1973. En este caso los interesados deben esperar (sic) al vencimiento del período prorrogado en cuyo caso el contrato deja de surtir sus efectos.

CUARTO: De ACUERDO CON EL ART. 3 de la Ley 93 de 1973, "Los desahucios y lanzamientos relativos a vivienda a partir de esta Ley serán de competencia de las Comisiones de Viviendas. El Decreto Nº37 del 15 de mayo de 1974 no puede reformar una Ley ni mucho menos definir el conocimiento de los asuntos que ella señala y distingue, En consecuencia, en tratándose de un arrendamiento de un inmueble destinado a VIVIENDA, el tribunal carece de competencia para conocer de esta demanda de desahucio.

QUINTO: El mencionado Decreto se refiere a los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles que se rigen por la libre contratación. Entre las partes de esta acción de desahucio la contratación queda regida por la Ley 93 mencionada y las partes sujetos a sus disposiciones de manera que no existe la libre contratación.

Por otra parte, es ir contra el derecho del arrendatario mediante separaciones o distinciones por razón de la cuantía del arrendamiento.

El artículo 46 de la Ley 93 de 1973 es inconstitucional. De mismo modo, el Decreto 37 de 1974 es inconstitucional.

De acuerdo con el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 188 de la Constitución, advierto al tribunal que las disposiciones mencionadas son inconstitucionales y por lo tanto solicito que se someta la cuestión al conocimiento del Pleno de la Hon. Corte Suprema. Me baso en los siguientes hechos:

PRIMERO: Las disposiciones que tacho de inconstitucionales son o fueron dictadas por motivos de utilidad pública o de interés social. Tales disposiciones originan conflictos que afectan los derechos de orden social que la misma Ley de vivienda en su sentido general reconoce en beneficio de los intereses públicos (sic) y sociales.

Por ello, tanto los artículos de la Ley 93 citada con los del Decreto 37 también mencionado, violan de modo directo al (sic) artículo 45 de la Constitución del país.

También las disposiciones tachadas de inconstitucionales violan de modo directo el artículo 109 de nuestra Carta Magna, al señalar esta disposición que la Ley de Vivienda en especial debe estar destinada a "proporcionar el goce de este derecho social" y hace énfasis en la protección de los sectores de menor ingreso sin excluir ni diferenciar a quienes gozan de mejores condiciones económicas.

El principio constitucional de las dos disposiciones que hemos revisado se inclinan poderosamente a dejar bien protegidos los derechos ciudadanos cuando se trate de leyes de utilidad pública o de interés social."

Dicha advertencia se mantuvo suspendida en Secretaría por providencia de 2 de febrero de 1982 en espera de sentencia de otra consulta de inconstitucionalidad propuesta sobre la misma normas legales, (sic) y que decidió la Corte el 3 de mayo de 1982 en la siguiente forma:

"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.
PANAMA, tres de mayo de mil novecientos ochenta y dos.-

VISTOS:

"El Juez 2º Municipal (Civil) del Distrito de Panamá consulta sobre la constitucionalidad del Art. 46 de la Ley 93 de 1973, adicionado por el Art. 6º de la Ley 28 de 1974 y del Decreto Nº37 de 1974, en virtud de advertencia que le fuera formulada por el Ldo. José A. Saavedra dentro de la acción de desahucio propuesta por "Paredes, González Ruiz, Ingenieros S.A. contra Ricardo Chong y María Cristina Torok de Chong.

Según el recurrente, las normas en referencia violan los Artículos 17, 31, 45 y 109 de la Constitución.

El Señor Procurador de la Administración en su Vista Nº15 de 3 de Febrero de 1982, considera que no se dan las violaciones alegadas.

Para decidir se considera:

Primero: El Art. 1º de la Ley 93 de 1973, tal como fue reformado por el Art. 1º de la Ley 28 de 1974, establece lo que se copia:

"Artículo 1. El artículo 1º de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973 quedará así:

"Es de orden público el arrendamiento de bienes inmuebles particulares destinados para habitación, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes.

Salvo lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 65, 66, y 68, el Órgano Ejecutivo podrá excluir del ámbito de aplicación de esta Ley, por medio del Decreto y en base a tramos de arrendamientos u otras características, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que se registrarán por la libre contratación."

"Como se ve la Ley 93 considera de orden público el arrendamiento de bienes inmuebles particulares y somete tal contrato a modalidades especiales que responden al principio consagrado en el art. 44 de la Carta Fundamental cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 44: La propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos en la Ley, puede haber expropiación mediante juicio especial e indemnización."

"Consecuente con este principio fundamental el artículo 241 de la misma Carta establece:

"Art. 241. El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente Título, con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país.

El Estado planificará el desarrollo económico y social, mediante organismos o departamentos especializados cuya organización y funcionamiento determinará la Ley."

"Tanto el Art. 46 de la Ley 93, como quedó reformado, así como el Decreto Nº37 de 1974 se dictaron en consonancia y en desarrollo del Art. 1º de la referida Ley el cual ya se ha transcrito y por tanto antes que violar la Constitución, son un corolario de sus disposiciones imperativas.

Es pues por lo dicho, por lo que la Corte Suprema, EN PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES el Art. 1º. de la Ley 93 de 1973, reformado por la Ley 28 de 1974 ni el Decreto Nº37 de 1974."

Como en dicha sentencia no se falló lo relativo al artículo 46 de la Ley, 93 de 1973 se hizo necesario disponer darle el trámite de Ley, a la presente advertencia en los términos que señala providencia de 15 de septiembre de 1982, dándose traslado de la misma al Señor Procurador de la Administración quien en su Vista Nº122 de 21 de octubre de 1982 expresó "opino que el artículo 46 de la Ley, 93 de 1973, adicionado por el artículo 6 de la Ley, 28 de 1972, no viola los artículos 45 y 109, ni ningún otro artículo de la Constitución Política," (Véase fojas 11).

El Artículo 46 de la Ley 93 de 1973 dispone:

"ARTICULO 46: Solo se admitirá la solicitud de desahucio cuando el propietario necesitare el inmueble arrendado para su uso personal o de algún miembro de su familia hasta el tercer grado de consanguinidad o cuando el inmueble se somete al Régimen de Propiedad Horizontal en los términos del Artículo 16, o para su demolición y construcción posterior de un nuevo edificio, lo cual debe ser debidamente comprobado mediante declaración jurada del solicitante o la presentación del permiso de demolición, según el caso. En caso de que el solicitante o familiar no ocupen el inmueble dentro de los tres (3) meses siguientes a la resolución que decretó el desahucio, el responsable será sancionado con multa hasta de B/.1500.00 sin excluir la indemnización a la cual podrá ser condenado por los daños y perjuicios causados."

"Adicionado por el Artículo 6º de la Ley 28 de 12 de marzo de 1974."

Sobre la disposición constitucional que se estima violada dijo el señor Procurador de la Administración:

"II. Sobre las disposiciones constitucionales que se estiman violadas:

El advertidor sostiene que la norma pretranscrita viola los Artículos 45 y 109 de la Constitución Política que preceptúa:

"ARTICULO 45: Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, re-

sultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social."

"ARTICULO 109: El Estado establecerá una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso."

III. Sobre el concepto de violación:

El recurrente expone así el concepto de la infracción:

"Las disposiciones que tacho de inconstitucionales son o fueron dictadas por motivos de utilidad pública o de interés social. Tales disposiciones originan conflictos que afectan los derechos de orden social que la misma Ley de vivienda en su sentido general reconoce en beneficio de los intereses públicos sociales.

Por ello, tanto los artículos de la Ley 93 citada con los del Decreto 37 también mencionados, violan de modo directo del artículo 45 de la Constitución del país.

También las disposiciones tachadas de inconstitucionales violan de modo directo el artículo 109 de nuestra Carta Magna, al señalar esta disposición que la Ley de vivienda en especial debe estar destinada a "proporcionar el goce de este derecho social" y hace énfasis en la protección de los sectores de menor ingreso sin excluir (sic) ni diferenciar a quienes gozan de mejores condiciones económicas.

El principio constitucional de los dos disposiciones que hemos revisado se inclinan poderosamente a dejar bien protegidos los derechos ciudadanos cuando se trate de leyes de utilidad pública o de interés social." (sic) (Cfr. fs. 1 y 2).

Veamos:

Es conveniente destacar que, por Ley Nº9, de 25 de enero de 1973, se creó el Ministerio de Vivienda, "con la finalidad de establecer, coordinar y asegurar de manera efectiva la ejecución de una política nacional de vivienda y desarrollo urbano

destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente a los sectores de menos ingresos tal como lo consagra el artículo 109 de la Constitución Política de la República de Panamá." (Art. 19.)

Luego, el titular del Ministerio presentó 12 proyectos de leyes al Consejo Nacional de Legislación, entre las cuales se encontraba el que posteriormente fue Ley 93, de 4 de octubre de 1973.

El carácter de orden público con que el artículo de esta Ley reviste al arrendamiento de bienes inmuebles comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes lo constituye en asunto de excepcional interés para el Estado. Pues, según nos enseña la doctrina, las leyes de orden público tienen por finalidad principal el mantenimiento del sistema económico, político y social del Estado y tratan de organizar los intereses superiores de la colectividad.

Pero me parece que en el caso de la Ley 93, ésta no puede desconocer la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley que garantiza el Artículo 43 de la Constitución Política. Obsérvese que el Artículo 46 permite el desahucio no de modo ad libitum sino de manera restrictiva para determinados y específicos supuestos, conjugando así los derechos de los propietarios con los intereses de los arrendatarios.

Ya vuestra augusta Corporación Judicial, (Pleno), en sentencia de 3 de mayo del año que decurre, expuso que el Artículo 46 de la Ley 93 de 1973, como quedó reformado, antes que violar la Constitución es un corolario de sus disposiciones imperativas. (Cfr. a f. 5).

En consecuencia, opino que el Artículo 46 de la Ley 93 de 1973, adicionado por el Artículo 6 de la Ley 28 de 1974, no viola los Artículos 45 y 109, ni ningún otro de la Constitución Política."

El Pleno comparte totalmente la opinión expresada por el Señor Procurador de la Administración en los conceptos transcritos en el sentido de que el Artículo 46 de la Ley 93 de 1973 no viola ni el artículo 45 ni el 109 ni ninguna otra disposición constitucional y añade:

.....
.....
....."

"Como se ve la Ley 93 considera de orden público el arrendamiento de bienes inmuebles particulares y somete tal contrato a modalidades especiales que responden al principio consagrado en el Art. 44 de la Carta Fundamental cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 44: La propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos en la Ley, puede haber expropiación mediante juicio especial e indemnización."

Consecuentemente con este principio fundamental el artículo 241 de la misma Carta establece:

"Art. 241. El ejercicio de las actividades económicas corresponden primordialmente a los particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente Título con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país.

El Estado planificará el desarrollo económico y social, mediante organismos o departamentos especializados cuya organización y funcionamiento determinará la Ley."

"Tanto el art. 46 de la Ley 93, como quedó reformado, así como el Decreto Nº37 de 1974 se dictaron en consonancia y en desarrollo del art. 19 de la referida Ley el cual ya se ha transcrito y por tanto antes que violar la Constitución, son un corolario de sus disposiciones imperativas."

Acorde con esos razonamientos la Corte Suprema, Pleno administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 46 de la Ley 93 de 1973.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE,

(FDO.) MARISOL M. REYES de VASQUEZ, (FDO.) EDGARDO E. ARTAS,
(FDO.) JULIO LOMBARDO A., (FDO.) PEDRO MORENO C., (FDO.)
AMERICO RIVERA L., (FDO.) GONZALO RODRIGUEZ MARQUEZ, (FDO.)
OLMEDO SANJUR G., (FDO.) LAO SANTIZO P., (FDO.) RICARDO
VALDES, (FDO.) SANTANDER CASIS S., SECRETARIO GENERAL.-

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES propuesto por HARMODIO
YUEN contra la DIRECCION GENERAL DE ARRENDAMIENTO.- (MAGIS-
TRADO PONENTE: LAO SANTIZO PEREZ).-

+++

Como lo que se pretende, en el
fondo, es invalidar resolucio-
nes administrativas que se en-
cuentran ejecutoriadas, causan-
do sus efectos, NO SE CONCEDE
el Amparo.-

+++

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. PANAMA, diez de diciembre
de mil novecientos ochenta y dos.-

V I S T O S:

El ciudadano panameño HARMODIO YUEN, quien porta la
cédula de identidad personal Nº8-26-626, por medio de la repre-
sentación judicial del Licdo. Dennis Allen F., instaura ante el
Pleno de esta Corporación acción constitucional de Amparo de
Garantías Constitucionales, con el propósito "de que se revoque
la "ORDEN DE HACER" contenida en la resolución número 85-82 de
19 de mayo de 1982, expedida por la Comisión de Vivienda número
(2) y confirmada mediante resolución número 82-154 L de dos (2)
de noviembre de 1982 de la Dirección General de Arrendamientos
del Ministerio de Vivienda, que en su parte resolutive ordena
el LANZAMIENTO del arrendatario señor HARMODIO YUEN".

Asimismo, expone los hechos en que se funda dicha ac-
ción y acusa como normas constitucionales infringidas los ar-
tículos 17, 31 y 188 de la Constitución Política.

Acogida la referida demanda y ordenada la suspensión
provisionalmente de los efectos de la orden impugnada, se proce-
de a resolver, previas las siguientes observaciones:

Se advierte que lo perseguido directamente por esa de-

manda, desde luego, por su planteamiento expreso, no es pro-
piamente la impugnación de una supuesta "orden de hacer",
sino la revocatoria, repetimos, de una resolución administra-
tiva, debidamente confirmada por otra. De modo, que si el
Pleno accede al presente Amparo, se estaría desviando la fun-
ción que le tiene reservada la Constitución y las Leyes a la
jurisdicción contencioso-administrativa, como es, la de velar
por el imperio de la legalidad.

En el fondo, lo que pretende este Amparo es invali-
dar dos resoluciones administrativas, tal como consta en el
expediente de fs. 1 a 9, las que se encuentran ejecutoriadas,
causando todos sus efectos jurídicos, y que por tanto, gozan
de presunción de legalidad.

En ese sentido, se advierte en la misma forma, que
la presunta orden de hacer contenida en la resolución Nº85-82
y su confirmatoria, no pueden ser violatorias de los artículos
17 y 31, menos del 188 de la Constitución Nacional.

Consecuente con las razones anteriormente expuestas,
el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE el Ampa-
ro solicitado en este caso.

COPIESE Y NOTIFIQUESE,

(FDO.) LAO SANTIZO PEREZ, (FDO.) RICARDO VALDES, (FDO.) MARISOL
M. REYES de VASQUEZ, (FDO.) OLMEDO SANJUR G., (FDO.) PEDRO
MORENO C., (FDO.) JULIO LOMBARDO, (FDO.) AMERICO RIVERA L.,
(FDO.) EDGARDO E. ARTAS, (FDO.) GONZALO RODRIGUEZ MARQUEZ,
(FDO.) SANTANDER CASIS S., SECRETARIO GENERAL.-

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES propuesto por RICARDO ERNESTO
WONG PITTI contra el Juez del Tribunal Tutelar de Menores. (MAGIS-
TRADO PONENTE: OLMEDO SANJUR G.).-

Contenido Jurídico

Amparo de Garantías Constitucionales. Arbitrariedad.

Como en la decisión jurisdiccional que
se impugna el recurrente agotó los medios
ordinarios que a su alcance le concedía la
Ley, no se puede considerar la misma como
un acto arbitrario emitido por ese funcio-
nario.

++ + ++

NO SE CONCEDE el Amparo.

++ + ++